



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-002-2022-00311-01 (O2-23-218)
Accionante: MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ
Accionada: COLPESIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 028
Asunto: PENSIÓN DE INVALIDEZ – CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA

En Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-002-2022-00311-01 (O2-23-218), instaurado por MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ en contra de COLPESIONES E.I.C.E. con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la administradora del RPMPD y el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de esta entidad oficial, respecto de la sentencia que fulminó la primera instancia, proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, conforme con los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990,

junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y en subsidio la indexación.

En respaldo de sus aspiraciones señaló que, nació el 23 de noviembre de 1956, por lo que al momento de presentar la demanda, tenía 65 años de edad; que a partir del 24 de mayo de 1978 se afilió al entonces Instituto de Seguros Sociales y efectuó los aportes al sistema de seguridad social a esa administradora, totalizando al 31 de julio de 2012, 916 semanas cotizadas. Acotó que padece de las patologías de hipotiroidismo no especificado, artrosis no especificada, trastorno afectivo bipolar, linfedema no clasificado en otra parte por insuficiencia venosa y gonartrosis bilateral no especificada. Contó que COLPENSIONES E.I.C.E. y las juntas calificadoras evaluaron su estado de salud y su capacidad laboral, en los siguientes términos:

| ENTIDAD CALIFICADORA | IDENTIFICACIÓN DEL DICTAMEN | PORCENTAJE DE PCL ASIGNADO | FECHA DE ESTRUCTURACIÓN |
|--|---|----------------------------|-------------------------|
| Colpensiones E.I.C.E. | Dictamen nro. 2018259984EE del 07-feb-2018 | 35,10% | 23-sep-17 |
| Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia | Dictamen nro. 075464-2018 del 16-ago-2018 | 60,99% | 4-may-17 |
| Junta Nacional de Calificación de Invalidez | Dictamen nro. 32349344-1376 del 09-feb-2020 | 60,99% | 4-may-17 |

Anotó que, para el 1 de abril de 1994, data del advenimiento de la Ley 100 de 1994, acreditó un total de 317,29 semanas, por lo que considera es beneficiaria del principio de la condición más beneficiosa de cara a la sentencia SU 442 de 2016 proferida por la Corte Constitucional. Ello así, el 15 de abril de 2021 solicitó el reconocimiento pensional a COLPENSIONES E.I.C.E., administradora que en Resolución SUB168673 del 22 de julio de 2021, negó el pago de la prestación económica bajo el supuesto que no contaba con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; decisión que fue confirmada ulteriormente a través de la resolución DPE7962 del 22 de septiembre de 2021, es por lo que considera le asiste razón a sus pedimentos.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 03 de agosto de 2022 (doc.04, carp.01), y se notificó a la demandada el 04 de agosto de 2018 (doc.06, subcarp.01, carp.01), dándose aviso también de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuradora Judicial Delegada para Asuntos Laborales (docs.05 y 06, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. al momento de dar respuesta al escrito incoativo aceptó como ciertos los hechos que hacen referencia a la fecha de nacimiento de la actora, el resultado de los dictámenes de PCL, la reclamación administrativa presentada y la respuesta brindada a la misma; a los demás hechos respondió no constarle o no ser ciertos. Es así que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo en su defensa los medios exceptivos de mérito que denominó como inexistencia de la obligación de reconocer y pagar al demandante la prestación solicitada (pensión de invalidez por condición más beneficiosa), compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, improcedencia intereses moratorios, improcedencia de la indexación y la genérica (doc.02, subcarp.08, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 18 de septiembre de 2023 (docs.20 a 21, carp.01) mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió “...CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a la demandante un retroactivo pensional causado desde el 4 de mayo de 2017 hasta el 18 de septiembre de 2023, en cuantía de \$73.685.612 y seguir cancelando la mesada pensional en los términos previstos en el numeral primero, adicionando la indexación correspondiente frente a las mesadas adeudadas hasta el momento en que se realice el pago efectivo y sea incluida en nómina de pensionados”.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de indicar los requisitos para obtener la pensión de invalidez pretendida, asentó que la accionante no satisfizo los imperativos previstos en el la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, para ser beneficiaria de la pensión de invalidez. Sin embargo, encontró que la solicitante cumple con los requisitos consagrados en la doctrina constitucional vertida en las sentencias SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019, relativa a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y siendo ello así, reconoció la prestación económica conforme con los lineamientos del Decreto 758 de 1990 (minuto 00:01 a 12:20, doc.20, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

La gestora judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. se mostró inconforme con la decisión e interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se desestimen todas y cada una de las pretensiones formuladas en los acápites pertinentes del libelo genitor. Para los anteriores propósitos, puntualizó que la pensión por invalidez a la que aspira señora MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ debe regirse por lo señalado en la Ley 860 de 2003 y no bajo el principio de la condición más

beneficiosa, toda vez que el estado de invalidez no se estructuró dentro de los límites temporales definidos por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, vale decir, entre el 29 de diciembre de 2003 al 29 de diciembre de 2006. Por consiguiente, al no haber totalizado 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, a la demandante no le asiste derecho a sus pedimentos. Finalmente, solicitó se revise la condena impuestas por el juzgador de instancia, en la medida en que su representada actuó de buena fe y con apego al material probatorio que reposa en la historia laboral de la afiliada (minuto 12:27 a 14:57, doc.02, carp.01).

1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la antedicha entidad, en los puntos que no fueron objeto de reproche.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación y el Grado Jurisdiccional de Consulta se admitieron el 02 de octubre de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído de la misma calenda se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarse necesario. La procuradora judicial de la entidad oficial presentó similares argumentos a los expuestos en la sustentación del recurso de alzada (doc.03, carp.01). A su turno, la parte actora se ratificó en las razones de hecho y de derecho con las que fundamentó el libelo inaugural (doc.04, carp.01).

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES E.I.C.E., advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia de primer grado versará sobre los puntos de inconformidad materia de alzada, a la par de surtirse el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad oficial, en los puntos en los que no fue objeto de impugnación.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se concreta en determinar si a la señora MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ le asiste el derecho al reconocimiento y pago indexado de la pensión de invalidez, efecto para el que será necesario establecer si es procedente aplicar las directrices que dimanarían del Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa, aunque el estado de invalidez se estructuró en vigencia de la Ley 860 de 2003, y a sabiendas de que el régimen inmediatamente anterior corresponde al comprendido en la redacción original de la Ley 100 de 1993; en caso afirmativo, habrá de establecerse, si la demandante acredita los requisitos para acceder al reconocimiento de la prestación pensional, cuál fue la fecha de su causación, desde cuándo debió hacerse efectiva, y si hay lugar al reconocimiento de la indexación.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primer grado, en atención a que sólo es viable aplicar el principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento pensional, por vía de la aplicación ultraactiva de las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1990, respecto de la afiliada a quien se le estructuró la invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003, cuando está probado que es una persona en condiciones de vulnerabilidad, en los términos fijados por la Corte Constitucional, calidad que acredita la señora MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, como se expondrá adelante.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y

por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que la pretensora efectuó aportes para los riesgos de IVM al RPMPD de manera intermitente a partir del 24-may-1978 y hasta el 31-jul-2012, acreditando 916,43 semanas (doc.03, subcarp.08, carp.01); que COLPENSIONES E.I.C.E. calificó la PCL de la actora en un 35,1%, tomando como fecha de estructuración el 27-sep-2017 y determinando su origen como común (págs.44 a 50, doc.03, carp.01); que la JRCIA varió la PCL a un 60,99%, definiendo el 04-may-2017 como fecha de estructuración (págs.53 a 58, doc.03, carp.01), determinación que fuera confirmada en su integridad por la JNCI en dictamen 32349344-1376 del 09-ene-2020 (págs.59 a 72, doc.03, carp.01).

2.3.1 De la Pensión de Invalidez

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como *“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, a disposición de las personas y la comunidad entera para garantizar un nivel de calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”* (Ley 100 de 1993, Preámbulo).

El Sistema General de Pensiones, fue a su vez concebido para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica periódica -pensión-, otorgada por la entidad administradora del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

Ahora, en lo que concretamente concierne al fin último de la prestación económica que se deriva del riesgo de invalidez a propósito de la materialización de una contingencia de origen común ora de origen laboral, la Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia ha puntualizado en sentencias SL3275 de 2019 y SL3873 de 2022 que aquella está *“destinada a cubrir las contingencias generadas por la enfermedad o el accidente que inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral. En ese sentido, su fin es garantizar a la persona que ve disminuida su capacidad para trabajar, un ingreso que le permita asegurar todas sus necesidades básicas, así como el de las personas que se encuentran a su cargo”*; tras, desde luego, darse cumplimiento a los requisitos legales establecidos para su causación y disfrute.

Valen las referencias anteriores, para denotar que en el *sub lite* la señora MARÍA MARLENY VLEÁSQUEZ SÁNCHEZ funda la titularidad de los derechos de contenido económico que persigue, en el dictamen de PCL extendido por la JNCI aportado desde la presentación del libelo inaugural (págs.61 a 72, doc.03, carp.01), el cual le otorgó una PCL igual a 60,99% por cuenta de los diagnósticos de gonartrosis no especificada bilateral, artrosis no especificada, hipertensión esencial (primaria), hipotiroidismos no especificado, linfedema no clasificado en otra parte en Ms-Is por insuficiencia venosa y trastorno afectivo bipolar no especificado. De igual modo, fijó como fecha de estructuración del estado de invalidez el 04 de mayo de 2017, lo que de suyo implica que, las reglas para determinar la existencia del derecho a la pensión de invalidez, en principio, se encuentran contenidas, en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003.

En aplicación de las máximas que gobiernan las aspiraciones de la actora, es menester para la prosperidad de las mismas, la demostración en juicio de las siguientes condiciones: i. padecer un estado de invalidez, o lo que es lo mismo, haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente (artículo 38, Ley 100 de 1993), y ii. que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

Así pues, refulge palmar la prueba del estado de invalidez como primer presupuesto al que se hizo mención en el punto retropróximo, teniendo en cuenta una PCL de 60,99% que le fuera asignada a la convocante por parte la JNCI en el dictamen nro. 32349344-1376 del 09-feb-2020. En segundo lugar, y de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, modificadorio del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y vigente para la fecha de estructuración de la invalidez de la demandante, el afiliado que pretenda acceder al reconocimiento de la pensión por invalidez debe acreditar 50 semanas de cotización, dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, avizorándose al respecto que la señora MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ no registra ninguna cotización entre el 04-may-2014 y el 04-may-2017, esto es, dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración (doc.03, subcarp.08, carp.01), y en tal medida, no causó el derecho al reconocimiento de la prestación pensional, en los términos previstos en la Ley 860 de 2003.

2.3.2. El principio de la condición más beneficiosa.

Ahora bien, por sabido se tiene que, en materia de prestaciones pensionales por invalidez y sobrevivencia, el legislador no previó un régimen de transición, como sí lo estableció para la

de vejez en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Luego entonces, por regla general, las disposiciones legales de seguridad social que resultan aplicables para resolver el reconocimiento de la prestación económica periódica de invalidez corresponden a aquellas que se encuentren en vigor a la fecha de estructuración de este estado, acogiendo así las reglas de aplicación inmediata de la ley y el efecto retrospectivo propio de las normas de seguridad social.

Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia ha reconocido que el principio de la condición más beneficiosa tiene aplicación directa cuando dentro del ordenamiento jurídico se presenta una sucesión normativa con una mirada retrospectiva, con ocasión de las disposiciones que se incorporan en procura de regular una materia sobre la que ya se había emitido una regulación, principio que tiene por objeto proteger a quienes, a pesar de no tener un derecho adquirido en sentido estricto, se encuentran en una situación jurídica y fáctica concreta por cuanto han cumplido íntegramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para obtener una prestación pensional, siempre que la sucesión normativa hubiere impuesto un trato diferente, más gravoso, y por un motivo no relevante, como lo es el hecho de que no obstante su situación concreta y definida, deba acreditar mayores requisitos.

En desglose de lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que al grupo familiar del afiliado que no dejare acreditados los requisitos exigidos en la Ley 860 de 2003, siendo éste el régimen aplicable, le asiste el derecho a que, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, la pensión de invalidez sea reconocida bajo el amparo de la Ley 100 de 1993, siempre que el afiliado (i) hubiere aportado 26 semanas en cualquier tiempo, si estaba cotizando para el 26 de diciembre de 2003; en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, si había dejado de cotizar para la época, (ii) hubiere cotizado la misma densidad de semanas o más, dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en la que tuvo lugar el cambio normativo, esto es, entre el 26 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre de 2003, y (iii) que la invalidez se hubiere estructurado dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, esto es, antes del 26 de diciembre de 2006 (CSJ SL del 25-07-2012, radicado 38674; SL-632 del 11-09-2013, radicado 45044; SL-16886 del 11-11-2015, radicado 54093; SL-8218 del 27-04-2016, radicado 8218; SL-3664 del 16-09-2020, radicado 50145; SL-2076 del 19-05-202, radicado 83566).

Sin embargo, en el caso *sub studium* se evidencia que la señora MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, aunque estaba cotizando para el momento en que se surtió el cambio normativo, 26 de diciembre de 2003, no había cotizado ninguna semana durante el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez (doc.03, subcarp.08,

carp.01), y aunque cotizó 51,43 semanas (360 días) entre el 26 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre de 2003 (doc.03, subcarp.08, carp.01), su invalidez se estructuró el 04 de mayo de 2017, esto es, transcurridos más de tres años desde la fecha en la que entró en vigor la nueva legislación (págs.61 a 72, doc.03, carp.01).

Y aunque en gracia de discusión se admitiere que, bajo el amparo del principio de la condición más beneficiosa, a la señora VELÁSQUEZ SÁNCHEZ le asiste el derecho a la aplicación del texto original de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que tampoco acredita los requisitos exigidos por el artículo 39 de dicha disposición normativa. Lo anterior, considerando que la promotora no se encontraba realizando aportes para la fecha en que se le estructuró el estado de invalidez, 04 de mayo de 2017, y no había cotizado ninguna semana en el año inmediatamente anterior (doc.03, subcarp.08, carp.01).

Ahora bien, dentro de la línea jurisprudencial descrita en las líneas que anteceden, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia enfáticamente ha reiterado que el principio de la condición más beneficiosa no supone una búsqueda normativa histórica, con el fin de aplicar aquella que se acomode de mejor manera a las circunstancias personales de cada afiliado, sino que comporta la aplicación excepcional de la norma inmediatamente anterior de la que regula de manera prístina la situación en que se encuentra, sin que sea posible aplicar las disposiciones del Decreto 758 de 1990, u otros anteriores, cuando la invalidez se estructura con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003.

No obstante, la posición asumida por el órgano jurisdiccional de cierre se contrapone a la tesis asumida por la Corte Constitucional, la que ha sostenido que es posible confrontar regímenes jurídicos que no son inmediatamente sucesivos, para efectos de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, y que *“... es válido invocar el referido principio para conceder la pensión de invalidez, en los términos del Decreto 758 de 1990, aunque el riesgo se hubiere estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003, siempre que en vigencia de aquel régimen pensional, se hubiere cumplido con el requisito mínimo de densidad de semanas para garantizar la pensión, esto es, que el afiliado hubiere cotizado 300 semanas antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones”* (SU-442 de 2016 – Subraya de la Sala); requisito que, *prima facie*, la señora MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ satisface, siendo que cotizó 303,4 semanas con anterioridad al 01 de abril de 1994 (doc.03, subcarp.08, carp.01).

En esa línea, importa relieves que la regla jurisprudencial antes descrita, fue condicionada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-556 de 2019, cuando asentó: *“...solo es proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa, en el sentido de aplicar*

ultra-activamente las disposiciones del Decreto 758 de 1990, cuando quien pretende acceder a la pensión de invalidez es una persona vulnerable, esto es, respecto de quien sufre una evidente afectación intensa a sus derechos fundamentales”, y para establecer a quienes les asistía el derecho a la aplicación amplia del principio de la condición más beneficiosa diseñó un “test de procedencia”, con base en las siguientes cuatro condiciones, cada una indispensable, y únicamente en conjunto suficientes:

| TEST DE PROCEDENCIA | |
|---------------------|---|
| Primera condición | Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa. |
| Segunda condición | Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. |
| Tercera condición | Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez. |
| Cuarta condición | Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez. |

Corte Constitucional, sentencia SU-556 de 2019

En relación con la primera de las exigencias trasuntas, la señora MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ cumple esta condición, en tanto en cuanto, actualmente cuenta con 66 años edad (pág.34, doc.03), superando la edad prevista en la Ley 2055 de 2020¹, al definir quiénes son adultos mayores, y objeto de especial protección constitucional (60 años). De igual modo, se infiere que se encuentra en situación de pobreza al encontrarse adscrita al régimen subsidiado en salud y vinculada al FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL – PROGRAMA DE SUBSIDIO AL APOORTE EN PENSIÓN como TRABAJADOR INDEPENDIENTE RURAL (docs. 2012071305005S0107040005.jpeg y 2012071305005S0107040006.jpeg; subcarp.04, subcarp.08, carp.01).

Para efectos de valorar el cumplimiento de la segunda condición del test de procedencia, se evidencia que la solicitante no acredita una fuente autónoma de ingresos económicos para subvenir los gastos necesarios para su propio sostenimiento, incluyendo alimentación, canon

¹ Ley 2055 de 2020. Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015. “(...) *Persona mayor*: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. (...) Para el caso colombiano, las personas adultas mayores constituyen sujetos de especial protección constitucional tal como lo ha precisado la Corte Constitucional, y de esta condición deriva el grueso de las obligaciones públicas con este grupo social y con cada una de las personas que envejecen. Desde el punto de vista cronológico tradicional, se consideran personas adultas mayores a mujeres y hombres con edades de 60 años o más, según el estándar reconocido y usado por la Organización de Naciones Unidas”

de arrendamiento y servicios públicos domiciliarios. Nótese que, la JNCI en la valoración de PCL del 09-ene-2020 (págs.61 a 72, doc.03, carp.01), consignó “*fecha: 29/08/2019. Especialidad: valoración terapeuta ocupacional: **Se desempeñaba como operaria de oficios varios en tejido de punto hace 27 años no trabaja, cotizó hasta hace 12 años**, a la valoración asiste con bastón tuvo reciente accidente con trauma en el tobillo, **vive con 4 hermanos, realiza us(sic) ABC de manera independiente, sólo un hermano trabaja** (...)”.*

-Negritas y subrayado intencional de la Sala-

En orden a lo anterior, considera este colegiado, que es posible inferir que la falta de reconocimiento de la pensión de invalidez, en caso de que se acrediten las condiciones para acceder a esta prestación, ciertamente tiene un impacto negativo y directo en el derecho al mínimo vital y la vida en condiciones decorosas de la suplicante.

En derredor a la tercera condición del test de procedencia, para esta Sala de Decisión, la falta de cotizaciones exigidas en la ley de seguridad social para acceder a la pensión de invalidez se explica con las patologías de gonartrosis no especificada bilateral, artrosis no especificada, hipertensión esencial (primaria), hipotiroidismos no especificado, linfedema no clasificado en otra parte en Ms-Is por insuficiencia venosa y trastorno afectivo bipolar no especificado; que actualmente aquejan el estado de salud de MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, lo que permite inferir que presentó dificultades para incorporarse en un mercado laboral que no es incluyente con las personas que padecen una discapacidad o estado mórbido, a lo que se suma que no cuenta con una adecuada capacitación para ejercer un oficio o labor, pues completó sólo la educación básica primaria².

Finalmente, la señora VELÁSQUEZ SÁNCHEZ demostró que adelantó de manera diligente las actuaciones pertinentes a fin de obtener el reconocimiento pensional ante la administradora del RPMPD en norte a acceder a la pensión de invalidez, agotando todos los recursos disponibles en sede administrativa. Esto es así, pues el proceso de calificación de PCL inició el 07-feb-2018 con el dictamen emitido por COLPENSIONES E.I.C.E. (págs.44 a 50, doc.03, carp.01) y culminó con la calificación proferida por la JNCI el pasado 09-ene-2020 (págs.61 a 73, doc.03, carp.01); para posteriormente promover la presente demanda el 11-jul-2022, luego de que la entidad oficial demandada se negará a acceder a sus pretensiones a través de las resoluciones SUB168673 del 22 de julio de 2021 y DPE7962 del 22 de septiembre de esa misma anualidad.

Por todo lo anterior y al trasluz de los criterios jurisprudenciales delineados por la Corte Constitucional en la sentencia atrás referida, concluye la Sala que, le asiste a la señora MARÍA

² La JNCI en dictamen nro. 32349344-1376 asentó que se trata de una paciente “...61 años soltera sin hijos escolaridad elemental, diestra, cotizó por Colombia Mayor 12 y medio años hasta el año 2012, desempleada hace más de 20 años”.

NELLY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ el derecho a la pensión de invalidez, aplicando la interpretación más amplia del principio de la condición más beneficiosa, que permite aplicar ultra-activamente las disposiciones del Decreto 758 de 1990, respecto de quien hubiere estructurado la invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003.

2.3.4. La liquidación de la pensión de invalidez

La pensión de invalidez se liquida con el promedio de los salarios o rentas sobre los que cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo, si este fuere inferior, o si hubiere cotizado más de 1.250 semanas, según le resulte más favorable (artículo 21 de la Ley 100 de 1993), y con el 45% del ingreso base de liquidación, más el 1,5% de dicho ingreso por cada 50 semanas cotizadas con posterioridad a las primeras 500, cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50% e inferior al 66%, o con el 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas cotizadas con posterioridad a las primeras 800, cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 66%, sin que pueda ser superior al 75% del ingreso base de liquidación, ni inferior al salario mínimo legal vigente (artículo 40 de la Ley 100 de 1993). Para calcular el ingreso base de liquidación, la Sala encuentra que, dado el valor porcentual del estado de invalidez y que el IBC no excedió el SMLV, es menester fijar la cuantía pensional en un salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 04-may-2017 como así lo estableció el juzgador de primer grado.

En el mismo sentido, se denota que sobre las mesadas antes descritas no ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, toda vez que, el derecho a la pensión por invalidez se hizo exigible con la declaratoria formal del dictamen emitido por la JNCI el 09-ene-2020 (págs.61 a 73, doc.03, carp.01) y la demanda fue presentada el 11-jul-2022, por lo que no transcurrió el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Adicionalmente, se vislumbra que, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, normativa con base en la cual COLPENSIONES E.I.C.E. está autorizada para descontar del retroactivo pensional adeudado, el monto correspondiente para sufragar los aportes para el Sistema General de Salud, como con acierto concluyó la agencia judicial de primera instancia.

Finalmente, y habida cuenta que las sumas reconocidas se verán afectadas por la devaluación de la moneda, por razón de que vivimos bajo una economía notoriamente inflacionaria, la indexación pretendida de forma subsidiaria, se constituye en el remedio efectivo a la devaluación de la moneda, *a fortiori*, si se trata de obligaciones propias del sistema de

seguridad social que tienen un notorio carácter alimentario (CSJ SL- 11818 del 08-08-1999, reiterada, entre otras, en la SL-54806 del 06-03-2013); no mereciendo reparo alguno lo decidido en este aspecto.

Corolario de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en tanto que se determinó acceder a los pedimentos promovidos por MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ en contra de COLPENSIONES E.I.C.E.

3. COSTAS

En segunda instancia no se impondrá condena en costas debido a que, a pesar del recurso interpuesto, la sentencia se revisó en su integridad en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES. Las de primera instancia se confirman, puesto que de conformidad con el artículo 365, numeral 1° las costas corren a cargo de la parte vencida, en este caso COLPENSIONES, además de haber ejercido una persistente y férrea oposición a las pretensiones incoadas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Cuarta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por MARÍA MARLENY VELÁSQUEZ SÁNCHEZ en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.


SEGUDO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



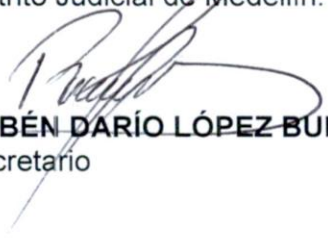
MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario